

## Secretaria Tribunal Administrativo - Seccional Armenia

**De:** Juan Claudio Arenas Ponce (C) <juanc.arenas@contraloria.gov.co>  
**Enviado el:** martes, 21 de enero de 2020 12:04 p. m.  
**Para:** Secretaria Tribunal Administrativo - Seccional Armenia  
**CC:** Efren Bermeo Velez (CGR)  
**Asunto:** Pronunciamiento medida cautelar proceso No 63001-2333-000-2019-00234-00  
**Datos adjuntos:** medida cautelar.pdf; poder.PDF

Atento y respetuoso saludo,

Adjunto encontrara poder y pronunciamiento a la solicitud de medida cautelar con destino al siguiente proceso:

**Medio de Control:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**Demandante:** FERNANDO DE JESUS CALLE MORENO  
**Demandado:** CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
**Radicación:** 63001-2333-000-2019-00234-00

Muchas gracias por la atención prestada

**IMPORTANTE:** Este documento es propiedad de la Contraloría General de la República de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La Contraloría General de la República de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por la Contraloría General de la República de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravié, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la Contraloría General de la República de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual la Contraloría General de la República de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.

HONORABLE MAGISTRADO  
RIGOBERTO REYES GÓMEZ  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO  
ARMENIA, QUINDIO

REF: PROCESO N°: 63001-2333-000-2019-00234-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL  
DERECHO

DEMANDANTE: FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO

DEMANDADO: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**JUAN CLAUDIO ARENAS PONCE**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.198.100 de Bogotá, portador de la Tarjeta Profesional de abogado No. 191.850 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado judicial de la **NACIÓN-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, según poder que adjunto al presente escrito para que me sea reconocida personería jurídica para actuar, procedo a pronunciarme, dentro del término de traslado otorgado por su despacho, sobre las medidas cautelares solicitadas por el demandante, solicitando respetuosamente se nieguen por carecer de los fundamentos fácticos y legales para su otorgamiento, con base en las siguientes consideraciones.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los procesos contencioso administrativos pueden ser solicitadas por parte del demandante las medidas cautelares que se consideren necesarias, ante lo cual la petición debe estar *"debidamente sustentada"*.

Asimismo, conforme a lo estipulado por el artículo 231 del CPACA, para que proceda el decreto de la suspensión provisional de un acto administrativo, del cual se presume su legalidad, debe haber existido violación de las disposiciones de carácter superior enunciadas en la demanda, así como los demás requisitos consagrados en la norma para las demás medidas cautelares, de los cuales se

destacan, que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar y que al no otorgarse se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que los efectos de la sentencia serían nugatorios. Al respecto, el Consejo de Estado ha establecido que:

*“Ahora bien, por tratarse la suspensión provisional de una medida cautelar en la que se involucran actos administrativos cuya legalidad se presume, el artículo 231 ibidem, impuso requisitos especiales para su procedencia, pues previó su viabilidad cuando se observe la «[...] violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud [...]».*

*Tal exigencia no implica la exclusión de los requisitos generales señalados en la segunda parte del precepto en mención, pues aunque allí se indica que «[...] En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos [...]», ello hace referencia a las exigencias adicionales aparte de las ya mencionadas para la suspensión provisional que deben ser tenidas en cuenta para las demás medidas cautelares, sin que se conlleve a exceptuar de su cumplimiento para la solicitud de suspensión provisional, pues esta ha sido clasificada también como una medida cautelar tal como lo dispone el artículo 230 del CPACA, por lo que debe cumplir tanto los requisitos especiales como los generales establecidos en la norma.*

*En efecto, no podría proceder la suspensión provisional de los efectos de un acto acusado, si la demanda no está debidamente fundada en derecho; si el actor no es el titular del instituto jurídico invocado; por lo que si el demandante presenta pruebas (documentos) y argumentos que permitan deducir que resultaría más gravoso para el interés público negar la suspensión de los efectos del acto administrativo que concederla, el Juez está en la obligación de decretarla, por lo que también resulta exigible para esta medida cautelar que se acredite que en el evento de no concederla se*

*configuraría un perjuicio irremediable y que, en caso de que no se decrete, los efectos de la sentencia podrían resultar nugatorios...”<sup>1</sup>*

Respetado Magistrado, de acuerdo con lo anteriormente manifestado, y de la simple revisión del escrito de solicitud de medida cautelar, se deduce claramente que la parte actora no cumple con los requisitos exigidos por la norma para acceder a su decreto.

Es así, como no proporciona ningún argumento que demuestre jurídicamente que la decisión tomada por la Contraloría General de la República en el fallo con responsabilidad fiscal vulnera normas de carácter superior, tampoco siquiera prueba o da razones del por qué se le causa un perjuicio irremediable y mucho menos razón alguna que conlleve a pensar que sí no se decreta la medida los efectos de una posible sentencia serían nugatorios.

En tal sentido, el Consejo de Estado ha sido explícito al momento de negar las solicitudes de medida cautelar que no cumplen con estos requisitos, consagrando expresarme que:

*“3.3. El artículo 231 del CPACA previó que la suspensión provisional de un acto administrativo procede cuando la violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores **invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.***

*3.4. De acuerdo a lo anterior, el Despacho no encuentra en la solicitud de suspensión provisional elevada por el demandante argumentos de orden jurídico que permitan confrontar el acto acusado con las normas superiores.*

*3.5. Al respecto éste Despacho, en auto del 27 de junio de 2018, **se refirió a la necesidad de invocar las normas superiores y las razones por las cuales se consideran vulneradas, con el fin de que sean confrontadas con el acto administrativo cuya suspensión se solicita.** En aquella oportunidad se afirmó<sup>2</sup>:*

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 12 de junio de 2018, Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00164-00, Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 27 de junio de 2018.

“La procedencia de esta medida cautelar está determinada por la violación del ordenamiento jurídico y la necesidad de proteger la legalidad en abstracto, mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado; situación que no se evidencia en el sub examine, debido a que, más allá de las consideraciones sobre lo que el demandante considera como injusto para los niños, niñas y adolescentes, no sustenta el porqué de la alegada vulneración, limitándose a realizar apreciaciones subjetivas, según su criterio, sin sustento normativo alguno que respalde su aserto. Para que proceda medida cautelar el actor tiene la obligación de explicar las razones de orden jurídico por las cuales considera que la norma demandada desconoce las superiores que invoca, mediante la comparación respectiva, pues la simple conjetura sobre las eventuales consecuencias que podría tener una norma sobre sus destinatarios no son razón suficiente para suspender un acto que se presume legal y válido. Ello significa que el solicitante no ha cumplido con los requisitos para la prosperidad de su solicitud, pues no ha indicado la manera en la cual el acto demandado infringe las normas superiores que invoca, ni ha demostrado perjuicio alguno, pues no basta con que manifieste eventuales situaciones futuras sino que debe demostrar su afirmación. [...] Como quiera que a partir de la confrontación entre el numeral segundo del artículo 2.3.3.5.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015 y las normas señaladas como infringidas por el actor, no se advierte prima facie una vulneración del ordenamiento jurídico superior, el Despacho concluye que no se reúnen los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA y, en consecuencia, denegará la medida cautelar solicitada”.

3.6. Ahora, en consideración a que en la solicitud de suspensión provisional no se presentó ningún argumento que permita al Juez, en esta etapa procesal, identificar un referente normativo con el que pueda confrontar el acto administrativo, no es procedente la suspensión provisional solicitada.

3.7. Así mismo, con relación al supuesto desconocimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional sobre el diseño e implementación de acciones afirmativas a favor de la población dedicada al oficio de reciclaje, tampoco obra en la solicitud la argumentación requerida para poder realizar la mencionada confrontación.

**3.8. De esta manera, la Sala Unitaria negará la solicitud de suspensión provisional del acto acusado al omitirse, por parte del demandante,**

---

CP. Oswaldo Giraldo López, número de radicación: 11001-03-24-000-2017-00075-00.

**presentar las razones jurídicas en las que fundamenta la supuesta violación de las normas superiores”.**

Ahora bien, de manera genérica argumenta el apoderado una vulneración del derecho al debido proceso, por cuanto supuestamente los actos administrativos enjuiciados no desarrollan los elementos de la responsabilidad fiscal en cabeza del demandante, así como existió caducidad de la acción por vulneración del artículo 45 de la Ley 610 de 2000.

Al respecto, de la simple comprobación del fallo con responsabilidad fiscal No 00001 del 25 de febrero de 2019 y del auto No 00031 de 8 de mayo de 2019 se desprende sin lugar a duda que la Contraloría General de la República desarrollo plenamente los elementos de la responsabilidad fiscal consagrados el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, esto es, la conducta del demandante, el daño patrimonial causado y el nexo causal entre los dos anteriores, por lo que no existe la vulneración al debido proceso alegado por el demandante.

Frente a la supuesta caducidad de la acción fiscal por vulneración del artículo 45 de la Ley 610 de 2000, debe manifestarse que el único término de caducidad de la acción fiscal y de prescripción del proceso de responsabilidad fiscal es el consagrado en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000<sup>3</sup>, por lo que, al no haber transcurrido los 5 años consagrados en la norma, mal puede el demandante alegar una vulneración a su debido proceso.

De igual manera, debe destacarse que el término que consagraba el artículo 45 de la Ley 610 de 2000 no tiene carácter preclusivo, por lo que no genera pérdida de competencia del funcionario de conocimiento. Al respecto, en sentencia No. 25000-23-27-000-2006-01364-01(17497) del 12 de abril de 2012 de la sección

<sup>3</sup> ARTICULO 9o. CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto.

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare.

cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado<sup>4</sup>, en lo referente a los términos de perentoriedad y preclusividad, el alto tribunal de lo contencioso administrativo aclaró la diferencia en los siguientes términos:

*“TERMINOS PROCESALES – Son de tipo perentorio. Efectos /REQUERIMIENTO ESPECIAL – Su expedición por fuera del término no anula las actuaciones proferidas con posterioridad / RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO – Se presenta cuando profiere el acto por fuera del término señalado en la ley / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – No siempre se presenta por el vencimiento del plazo. Los casos en los que se presenta son taxativos*

**La Sala reitera que, en general, los términos procesales que tiene el Estado para proferir las decisiones correspondientes son términos de tipo perentorio pero no necesariamente preclusivos.**

**Es decir que, así esté vencido un plazo, la decisión correspondiente resulta válida y eficaz, salvo que el legislador expresamente haya consagrado otra disposición como cuando estipula la preclusión del término en el sentido de indicar que la Administración pierde competencia para decidir y que, en su lugar, surja el acto ficto o presunto favorable al administrado. El vencimiento de los plazos meramente perentorios puede implicar la responsabilidad personal del agente que se ha demorado en tomar la decisión pero no afecta la validez de la decisión misma. Ese tipo de plazos son los más comunes en el derecho procesal, como por ejemplo, el plazo para dictar la sentencia que instituye tanto el C.C.A. como el C.P.C. Así esté vencido el plazo, la sentencia es válida y eficaz, sin perjuicio de que pueda existir en un momento dado responsabilidad personal del funcionario judicial si el**

<sup>4</sup> CONSEJO DE ESTADO - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección cuarta - Radicación número: 25000-23-27-000-2006-01364-01(17497)- doce (12) de abril de dos mil doce (2012). Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS.

*vencimiento del plazo ocurrió injustificadamente. En general, las normas de competencia temporal, esto es, por razón del tiempo, que es el tema que subyace en un plazo legal para producir una decisión, deben interpretarse a favor de la competencia misma. **Así, sólo cuando está expresamente previsto otro efecto, el vencimiento del plazo no comporta siempre y necesariamente un caso de silencio administrativo positivo y mucho menos de nulidad de los actos administrativos. (...)*** (Subrayado fuera de texto).

Por último, debe destacarse que el demandante pretende dar un alcance al artículo 45 de la Ley 610 de 2000 que no posee, puesto que, como bien lo consagra el artículo 46 de esta normativa<sup>5</sup>, dicho término estaba consagrado para el interregno entre el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal y su correspondiente imputación o archivo del proceso, no para las etapas previas a que se aperturara la investigación, máxime cuando en el presente caso se está en presencia de un proceso verbal, regido por la Ley 1474 de 2011.

De acuerdo con las con las anteriores consideraciones resulta palmario que no es posible que se acceda a la solicitud de medida cautelar presentada por el accionante, pues no cumple con los requisitos consagrados en el CPACA para que se pueda acceder a ella, y al contrario, el decretarla sí estaría afectando de manera grave el interés público al suspender, en este caso en concreto, la facultad del Estado en cabeza de la Contraloría General de la República de recuperar el detrimento que se ha generado en el patrimonio público, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 268 de nuestra Constitución<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> ARTICULO 46. DECISION. Vencido el término anterior, se procederá al archivo del proceso o a dictar auto de imputación de responsabilidad fiscal, mediante providencia motivada, según sea el caso.

<sup>6</sup> ARTICULO 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:  
(...)

5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.



### Petición

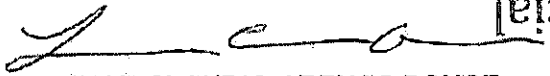
En mérito de las consideraciones expuestas, atentamente solicito al Señor Magistrado no se acceda al decreto de la medida cautelar, pues la misma carece de los fundamentos jurídicos y facticos para su concesión.

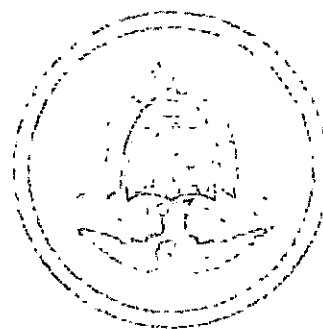
### Anexos

El poder y sus anexos

### Direcciones para notificaciones

Recibiré notificaciones personalmente en la **OFICINA JURÍDICA** de la **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, ubicada en la Cra. 69 No. 44-35, piso 15, de la ciudad de Bogotá y en el correo electrónico [notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co](mailto:notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co).

Atentamente, \_\_\_\_\_  
Repubblica de Colombia  
Consejo Superior de la Judicatura  
Rama Judicial  
  
JUAN CLAUDIO ARENAS PONCE  
CC No. 80.198.100 de Bogotá D.C.  
T.P. 191.850 del C.S. de la J.



Bogotá D.C.

HONORABLE MAGISTRADO  
RIGOBERTO REYES GÓMEZ  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO  
ARMENIA, QUINDIO

REF: PROCESO N°: 63001-2333-000-2019-00234-00  
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
DEMANDANTE: FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO  
DEMANDADO: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

JÚLIAN MAURICIO RUÍZ RODRÍGUEZ, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 86.069.388, de Villavicencio, obrando en mi condición de Representante Judicial de la Contraloría General de la República, como Director de la Oficina Jurídica, tal como lo acredita la Resolución Reglamentaria número 0284 proferida el 24 Agosto de 2015 y la certificación del cargo desempeñado, cuyos ejemplares se acompañan al presente escrito, a usted atentamente manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor **JUAN CLAUDIO ARENAS PONCE**, contratista adscrito a la Oficina Jurídica de esta Entidad, identificado como aparece al pie de su firma, para que en nombre de **LA NACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**, asuma la representación de sus intereses jurídicos y patrimoniales e intervenga en todas las diligencias que se evacuen en el proceso de la referencia


El apoderado queda investido de amplias facultades para actuar en nombre y representación de LA NACIÓN-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en ejercicio del mandato otorgado, quedando especialmente facultado para conciliar, interponer recursos, sustituir, reasumir y en general, para todas aquellas que se requieran y tiendan a la cabal ejecución de la gestión encomendada.

Sírvase señor Magistrado reconocerle personería en los términos aquí señalados.

Atentamente,

  
JÚLIAN MAURICIO RUÍZ RODRÍGUEZ  
Director Oficina Jurídica

Acepto

  
JUAN CLAUDIO ARENAS PONCE  
C.C. 80.198.100 de Bogotá  
T.P. 191.850 del C. S. de la J.

Proyectó Juan Claudio Arenas Ponce  
Revisó Luz Carolina Pinzón Quintero





## DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO

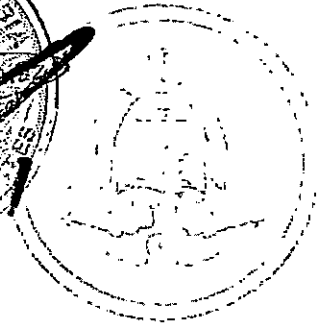
NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

LA NOTARIA 73 DE BOGOTÁ HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PRESENTADO PERSONALMENTE POR RUIZ RODRIGUEZ JULIAN MAURICIO, QUIEN EXHIBIO LA C.C.86069388 Y T. P. No.\*\*\* Y DECLARÓ QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES SUYA Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO.

viernes, 17 de enero de 2020  
BOGOTÁ D.C.



Judicial Superior de la Judicatura de Colombia



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

EL DIRECTOR DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

HACE CONSTAR

Que el Doctor **JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.86.069.388, en la actualidad es el titular del cargo de Director de Oficina, Nivel Directivo Grado 04 de la Oficina Jurídica, quien fue nombrado mediante Resolución Ordinaria No.2387 del once (11) de septiembre de 2018 y, desempeña formalmente las funciones de dicho cargo a partir del día diecisiete (17) de septiembre de 2018.

Dado en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018).



**LUIS FRANCISCO BALAGUERA BARACALDO**  
Director de Gestión del Talento Humano

Proyectado por: Carivera – PG01 - GTH



# RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL

NÚMERO: 0284

FECHA: 24 AGO. 2015

PÁGINA NÚMERO: 1 de 2

Por medio de la cual se delega la función de representar judicialmente a la Nación - Contraloría General de la República

## EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

El Contralor General de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 263 de la Constitución Política, el artículo 26 del Decreto Ley 267 del 22 de Febrero de 2000, en concordancia con las demás

Rama Judicial  
Corte Superior de la Indica  
República de Colombia

### CONSIDERANDO:

Que el numeral 5º del artículo 35 del Decreto - Ley 267 de 2000 le asigna al Contralor General de la República la función de representar legalmente a la entidad en todos los asuntos que en el ejercicio de sus funciones se presenten a favor o en contra de la Contraloría;

Que el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, dispone que la entidad, órgano u organismo estatal estará representada para efectos judiciales por el Ministro, Director, de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

Que el artículo 26 del Decreto - Ley 267 de 2000, le otorga al Contralor General de la República la facultad de delegar competencias administrativas, técnicas o jurídicas en los términos de los respectivos actos de delegación y de lo dispuesto en el Decreto Extraordinario citado;

Que el numeral 15 del artículo 43 del Decreto - Ley 267 de 2000, establece que es función de la Oficina Jurídica, entre otras, la de representar judicialmente a la Contraloría General de la República ante las autoridades competentes cuando fuere el caso. Igualmente el numeral 17 "ibidem" le encomienda la atribución de atender y vigilar las tutelas, acciones de cumplimiento, y el cumplimiento de sentencias en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte la Contraloría General;

Que en razón de lo manifestado se hace necesario delegar en el Director de la Oficina Jurídica la función de representar judicialmente a la Nación - Contraloría General de la República, a efecto de garantizar la adecuada y eficiente representación

*[Handwritten signature]*



RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL

NÚMERO: 0284

FECHA: 24 AGO. 2015

PÁGINA NÚMERO: 2 de 2

Por medio de la cual se delega la función de representar judicialmente a la Nación - Contraloría General de la República

de los intereses jurídicos y patrimoniales de la entidad en los diferentes procesos, asuntos y trámites de carácter judicial en los que deba intervenir.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en el Director de la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría General de la República, la función de representar judicialmente a la Nación - Contraloría General de la República, para lo cual se le asigna expresamente la facultad de otorgar poderes a los profesionales abogados encargados de la defensa judicial de la entidad, según se requiera, para que representen judicialmente a la Nación - Contraloría General de la República en los diferentes procesos, trámites y demás asuntos de carácter judicial en que se deba actuar en defensa de sus intereses jurídicos o patrimoniales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Facultar a los profesionales abogados encargados de la defensa judicial de la entidad adscritos a la Oficina Jurídica para recibir notificaciones de las diferentes providencias que profieran las autoridades judiciales en los procesos en los que sea parte o en los que deba intervenir la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución deroga la resolución No. 040 del 09 de agosto 2006.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Edgardo Maya Villazón  
Contralor General de la República

24 AGO. 2015

Revisó: Alfonso Martínez Domínguez, Director Oficina Jurídica Contraloría General de la República  
Proyectó: Oscar Ariza, Oficina Asesora Jurídica

Publicada en el Diario Oficial No. 43316 de 24 AGO. 2015